

Europa, estancada..

La crisis no sólo afecta a España, pero aquí se ve agravada por problemas singulares

EDITORIAL

Un año después de la aparición de los primeros síntomas de la crisis financiera global, todos los indicadores confirman que la fiebre se ha extendido ya, con singularidades propias de cada país, a la generalidad de las economías. Las europeas han sufrido un rápido retroceso, especialmente las de países tan importantes como Alemania, Francia, Italia y, desde luego, España, todas ellas en crecimiento negativo o próximo a cero respecto al trimestre anterior. Y lo que llevamos de la segunda mitad del año no sólo confirma esa debilidad, sino que la extiende a otras economías (Japón vuelve a la senda de recesión) y acentúa la incertidumbre acerca del momento de su superación.

La crisis afecta de manera más intensa a los países que han vivido una expansión mayor del sector de la construcción, como España, sobre todo, pero también Irlanda, Reino Unido y EE UU. Pero ninguna economía escapa ya a los efectos del aumento de precios de las materias primas y de la prolongada crisis de los mercados de crédito y las estrechamente asociadas amenazas que siguen pesando sobre algunos sistemas financieros.

Esa coexistencia de perturbaciones de distinta naturaleza, que requerirían terapias en parte contradictorias, complica las decisiones de política económica. La contención de la inflación se enfrenta a la amortiguación del impacto desacelerador de la actividad sobre el empleo, dificultando las decisiones monetarias de los bancos centrales. La preservación de la estabilidad financiera no siempre es compatible con el libre juego del mercado, y los apoyos que requieren algunas entidades financieras. El mal funcionamiento del mercado de crédito ha forzado la intervención de las autoridades en algunos países.

Europa ha de resolver de forma coordinada los problemas que sean comunes, como los relativos a la estabilidad financiera. Y ahí el papel del Banco Central Europeo (BCE) es importante. Hasta ahora ha puesto más celo en acreditar su empeño antiinflacionista que en el crecimiento de las economías y la capacidad de las mismas para generar empleo. El mercado, sin necesidad de que el BCE subiera tipos, ya lo había hecho en exceso: el Euríbor nunca estuvo más distanciado de los tipos oficiales. Al mismo tiempo, los datos de los bancos centrales sobre la actitud restrictiva de la banca para conceder préstamos indica que no estamos precisamente en una fase de expansión monetaria.

Es cierto, por tanto, que el mal es general, pero la crisis tiene en España causas internas que no se atajaron a tiempo y características singulares como el persistente diferencial de inflación y el elevadísimo déficit exterior, efecto de la pérdida de competitividad. Las medidas anticrisis deben tener en cuenta esa singularidad y servir para estimular el cambio de modelo de crecimiento.

... y las recetas de Zapatero

Es lo que se propone el Gobierno con el nuevo paquete de medidas aprobadas ayer en un Consejo de Ministros extraordinario. Con su inusual convocatoria a mediados de agosto, el presidente demuestra que está dispuesto a recuperar la

iniciativa política en el tratamiento de lo que llamó "estancamiento" y "frenazo económico". El margen de maniobra del Ejecutivo es limitado, ya que gran parte de las causas de la crisis son externas, pero mejor es tomar iniciativas que, como proponen algunos gurús ultraliberales, quedarse quieto mientras pasa el vendaval. En ese sentido, hay que aplaudir el traslado al terreno estrictamente económico de la vocación reformista de este Gobierno, y apoyar, por ejemplo, su propósito de ayudar a las familias y a las empresas en dificultades —siempre que en este último caso no se recurra a intervenciones directas—; pero las propuestas concretas recitadas ayer por el presidente Zapatero provocan dudas.

En unos casos, por la liviandad de los remedios. Es el caso de la enésima reducción de los aranceles que se pagan a notarios y registradores para constituir hipotecas y otros servicios. En otros, por la dudosa rentabilidad de la medida, como las ayudas al alquiler. Y en algunos, las dudas surgen de la imprecisión. Está bien inyectar 20.000 millones de euros para ayudar a pequeñas y medianas empresas o a la vivienda, pero hay que detallar la rentabilidad de esas ayudas y a través de qué procedimientos se aplicarán. Las reformas anunciadas —menor burocracia para crear empresas y liberalización de servicios— no tendrán efecto a corto y medio plazo y, en todo caso, en aquellas actividades que afecten a los mercados las liberalizaciones exigen como contrapartida controles para impedir prácticas contrarias a la competencia.

El Gobierno admite ya que estamos ante una crisis grave, y no una simple desaceleración; pero el argumento de que a otros les va peor refleja una resistencia a reconocer que sus causas no son sólo exógenas: que hubo inercias que retrasaron, por complacencia con los excelentes registros de empleo y PIB, medidas como las que ahora se enuncian, muchas de ellas planteadas hace años. Y se echan en falta asuntos de más calado, como la posibilidad de reducir las cargas sociales que pesan sobre la creación de empleo o la vinculación de las subidas salariales con la productividad y no sólo con el IPC.

Algunos analistas denuncian que el Gobierno dispersa sus políticas en demasiadas direcciones y que sería mejor seleccionar unas cuantas imprescindibles y aplicarlas hasta el final, rindiendo cuentas de sus resultados. Por ejemplo, en iniciativas de impulso de la productividad, que es la clave esencial de nuestros problemas. La situación exige menos agitación gestual, a la que tanto recurre la oposición, y más realismo.

El País, 15 de agosto de 2008